

IV. ANÁLISIS CULTURAL*

EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, TAREA PENDIENTE DE LA DEMOCRACIA

La búsqueda de una alternativa por la vía del consenso y la autolimitación

Leonardo Méndez Sánchez

Recientemente estuvo en México la señora Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el mundo. Entre sus diferentes actividades y recomendaciones, se preocupó por conocer el estado del respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas; específicamente, estuvo en San Cristóbal de las Casas, y pudo entrevistarse con algunos de los sobrevivientes de la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, y en la cual murieron 45 indígenas y, por lo menos, 31 resultaron heridos.

Es difícil abordar el problema de los derechos humanos de los pueblos indígenas sin sentirse involucrado con la situación que se analiza. El compromiso puede tener diferentes posibilidades de participación: desde impulsar proyectos que pudieran incidir en las políticas nacionales sobre las cuestiones indígenas, hasta el trabajo con los indígenas en sus comunidades, y también con aquellos que tuvieron que salir y ahora sobreviven dentro de los núcleos urbanos. No se puede hablar en este momento de derechos de los pueblos indígenas sin referirse a los hermanos que viven en las zonas de conflicto de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y las huastecas, entre otros estados.

La estructura de este ensayo es muy sencilla: en el primer apartado se pretende señalar que detrás de los problemas de los derechos humanos hay diferentes posiciones, que van desde pensar que se habla de derechos hu-

* En esta ocasión decidimos dividir este análisis en dos partes. Una dedicada a los derechos humanos de los indígenas, dada la importancia que tiene este tema y la otra, al análisis propiamente dicho.

manos como una forma de sostener que se ha desestructurado el mundo de vida de los sujetos, hasta una forma de desviar la atención de los problemas reales de explotación y dominación que sufren los marginados, urbanos y rurales. Aquí se describe brevemente cuáles serían las necesidades que los derechos humanos de los pueblos indígenas podrían satisfacer.

En un segundo apartado se analiza el problema de los derechos indígenas a partir de un artículo de Rodolfo Stavenhagen, publicado en 1986, con la intención de mostrar que no se trata ni de una nueva preocupación, ni tampoco de que el interés por los derechos humanos de los pueblos indígenas tenga su origen en el conflicto iniciado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En el tercero se hace un análisis crítico de las posibilidades de lograr un consenso que conduzca al cumplimiento de algunos derechos indígenas; de entrada ya no se piensa en soluciones globales, sino en ir logrando acuerdos fáctico-pragmáticos, en donde se vayan insertando soluciones parciales, que irían incrementándose hasta generar espacios sociales más cercanos a la forma de ser propia de los pueblos indígenas. La propuesta sostiene que es necesario, desde posiciones autolimitantes, abrir alternativas que conduzcan a un diálogo honesto y comprometido, que generen consensos y acuerdos, y que planteen soluciones a los problemas de las comunidades indígenas.

1. El cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas

El concepto de los derechos humanos corre el riesgo de tener un uso funcional, y entonces, atendiendo a diferentes intereses y circunstancias, se le pueden asignar concepciones distintas. No se quiere decir lo mismo cada vez que se propone el respeto a los derechos humanos. Tampoco los diferentes grupos interesados en un mismo conflicto entienden su protección de la misma manera. Dependiendo del momento y el interés que se persiga se puede apelar, por ejemplo, al cumplimiento de los derechos humanos sin referirse, necesariamente, ni al mismo sentido ni a contenidos semejantes.

El tema que nos ocupa hoy requiere, como ningún otro, una serie de precisiones para ubicar el sentido de los diferentes discursos, particularmente de lo que se pretende decir dentro y fuera de las comunidades indígenas. Los derechos humanos de los pueblos indígenas no son entendidos de la misma manera al interior de las comunidades indígenas, o por los funcionarios del gobierno, o por la llamada sociedad civil.

Tratando de caracterizar lo que se quiere plantear al hablar del cumplimiento de los derechos humanos de los indígenas, conviene precisar diferentes enfoques o acercamientos a esta problemática.

a) Hay quienes consideran que esta preocupación surge en el momento en que se generaliza su violación, o cuando el sistema vigente o los grupos que detectan el poder, hacen de su violación una alternativa para conservar el poder, o el control y el dominio de un determinado grupo social. De no haber violaciones a los derechos humanos, no habría denuncias o indicaciones de que es necesario cumplirlos. Es evidente que los pueblos indígenas, desde la conquista, han sufrido particularmente la violación sistemática a sus derechos. Se ha globalizado nuestra economía, pero no el respeto a las diferencias, ni a modos de ser diferentes.

b) En el caso mexicano, la protección a los derechos humanos es parcial. No se consideran ni los derechos laborales, ni los derechos políticos. Las cuestiones que surgen en relación con estos temas no son protegidas por las comisiones de derechos humanos. Es evidente que quienes padecen de manera particular esta limitación son precisamente los pueblos indígenas, son los más desprotegidos.

c) Suele ocurrir que la referencia a la violación de los derechos humanos se ubique en un contexto más amplio. En el caso de los derechos de los indígenas, no se trata sólo de violaciones externas o superficiales, sino de la desestructuración del mundo de vida de pueblos enteros. Se han señalado de manera parcial diferentes violaciones. Pero en el fondo mismo de estas agresiones repercute la desestructuración del mundo de vida del indígena; esto significa que históricamente han sido controlados por las diferentes instancias del poder, y no hay forma de impugnar su restitución en las comisiones de derechos humanos que pertenecen al poder. Las opciones no gubernamentales, la sociedad civil, carecen aún de la fuerza necesaria para constituirse en factor decisivo en lo que refiere a derechos, cultura y políticas indígenas.

d) Cuando se denuncia la violación de los derechos de los pueblos indígenas, en rigor se denuncia el incumplimiento del criterio de igualdad y equidad con el que se debe ejercer el poder. Llama la atención que en el discurso del presidente Zedillo para rechazar el compromiso firmado de los acuerdos de San Andrés, se sostiene que se rompería el criterio de igualdad en los derechos y deberes constitucionales de los mexicanos. En rigor, la igualdad política no existe de *facto* y, por el contrario, es en la

desigualdad en las condiciones de vida, de producción, de comercialización y frente a la cultura occidental, donde se originan los problemas señalados. Acerca de la equidad, la posibilidad de participación de las comunidades indígenas es inferior, no hay competencia, de entrada están derrotadas. En la lucha por la democracia se hace énfasis en la igualdad, pero sin equidad: la igualdad sólo justifica el dominio.

e) Para la sociedad civil, apelar al cumplimiento de los derechos humanos es una alternativa para demandar al poder el cumplimiento de sus obligaciones o para reparar el daño causado en el ejercicio de la autoridad. Lamentablemente, la organización de nuestra sociedad civil es aún deficiente; de pronto responde sólo a la ineficiencia de los partidos políticos, y son los mismos militantes de éstos quienes la integran. Queda pendiente una participación crítica y reflexiva, abierta y plural de la sociedad civil.

Con las referencias anteriores no se pretende, de ninguna manera, agotar las diferentes alternativas para tratar los derechos humanos. La pretensión es más modesta, es ofrecer un panorama que dé contexto a la tesis que subyace a esta propuesta: el cumplimiento de los derechos humanos debe ser producto de un consenso, lo cual supone un ejercicio del poder reflexivo y autolimitante.

Hoy es difícil hablar del cumplimiento de los derechos humanos en las sociedades menos desarrolladas, en sus zonas marginadas y, en concreto, en sus pueblos indígenas, aun cuando es más notoria la violación sistemática de sus derechos más fundamentales. Llama la atención que se manifieste, con cierto orgullo, que hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hay Comisiones Estatales, que la sociedad civil tiene organismos no gubernamentales para proteger a los ciudadanos, y es más, que hay organismos internacionales aceptados por los gobiernos, como el caso de la ONU, y otros que sostiene la sociedad civil. Pero si se habla de proteger los derechos humanos es porque hay violaciones y desconocimiento de los derechos específicos, o bien porque hay grupos específicos que no pueden satisfacer sus necesidades más elementales. Se deben proteger los derechos porque se están violando.

En referencia a los derechos humanos de los pueblos indígenas, exigir su cumplimiento obedece a que, en el actual momento de desarrollo de las sociedades avanzadas, todavía no se resuelven sus demandas más elementales. Estos requerimientos se pueden clasificar de la siguiente manera:

a) Necesidades materiales: las más denunciadas. Se refiere a la miseria, la explotación y la opresión en que viven en los pueblos indígenas. Se habla del hambre que los aniquila, de las enfermedades curables que provocan la muerte, de las condiciones de vida inhumanas, pero también de sistemas económicos que les impiden desarrollarse y competir con el exterior. En el documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su convención 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, art. 7 núm. 2, se lee que las acciones gubernamentales deben procurar:

El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan.

b) Necesidades culturales: las más exigidas. Con frecuencia se indica que no hay derecho alguno para violar sistemáticamente las tradiciones, costumbres y creencias de los pueblos indígenas. Hay posiciones que exigen el respeto absoluto a sus culturas, por considerar que lo que se puede ofrecer a cambio no implica una mejor condición de vida. Pareciera que el respeto a esta cultura es cada día más difícil o imposible, debido a la fuerza con que el proyecto globalizador viene presionando a las sociedades. Por otro lado, si se revisa cuál es el resultado del contacto entre las culturas indígenas y el mundo modernizado, se observan cambios y manifestaciones que no necesariamente deban ser consideradas como negativas. En el mismo documento anterior, pero en su art. 7 núm. 1, encontramos que:

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades... de desarrollo, en la medida en que ésta afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual... y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas en desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

c) Necesidades políticas: las más desconocidas. Exigir mejores condiciones de vida y respeto a las tradiciones culturales está muy bien, no representa peligro alguno, y se considera que se gana en prestigio social el

procurar remediar o luchar porque se satisfagan estas necesidades. Pero considerar que se les deben respetar sus derechos políticos, que no deben ser objeto de manipulación o control en beneficio de los grupos dominantes, o que de plano se les debe otorgar autonomía política, para que puedan organizarse de acuerdo con sus usos y costumbres, es francamente peligroso. Y aquí entran todas las justificaciones; lo mismo se habla de que no tienen la preparación necesaria para establecer las mejores estructuras o mediaciones sociales, o que si se reconoce su autonomía, se podría romper con la unidad de la nación. A propósito, en el núm. 3 del mismo artículo se indica:

Los gobiernos deberán velar porque, siempre haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterio fundamental para la ejecución de las actividades mencionadas.

1.1. Los derechos humanos de los pueblos indígenas. Precisiones sobre su problemática

Después de la declaración de guerra del EZLN, el tema de los derechos humanos de los pueblos indígenas está inscrito en la lista de pendientes de la política mexicana; primero, tenía una marca de urgente y peligroso, ahora sólo indica que hay un conflicto regional que sigue acotándose a esa zona. La esperanza del gobierno mexicano, tal vez, es que llegue a ser sólo un problema de diferencias entre grupos de distinta afiliación política. La guerra de baja intensidad está dando los resultados esperados por el gobierno, pero la vida de las comunidades indígenas ha empeorado. La paz con justicia y dignidad está teniendo un alto costo para el EZLN y sus bases de apoyo. Viven hostigados, e intimidados. Los operativos para desequilibrar los municipios autónomos, el impresionante número de retenes, la penetración de los militares en las zonas zapatistas, han generados nuevas formas de vida, no del todo desconocidas. Están siendo sometidos nuevamente; la modernidad les llegó en forma de una nueva conquista, ahora diseñada en los Estados Unidos.

Pero, ¿cuáles son los problemas que se deben resolver? En un artículo publicado en 1989,¹ Rodolfo Stavenhagen hace una lista de los problemas y demandas pendientes de los pueblos indígenas:

1) Definición, membresía y estatuto legal. Aparentemente, aquí bastaría con especificar quiénes pertenecen a un grupo indígena, pero el problema no estaría resuelto. Aun otorgando un reconocimiento legal, definiendo con precisión a quiénes se incorporaría dentro de este estatuto, quedaría pendiente el reconocimiento real, específico y concreto de una comunidad que no está arriba o abajo de la escala social, sino que simplemente es diferente. Está pendiente la discusión de quiénes podrán ser considerados indígenas, el alcance de la noción de comunidad, el territorio que ocupan, su relación con las instituciones y estructuras sociales vigentes, y la relación con el marco legal vigente. En el documento citado de la OIT, se explica, en el art.1 núm. 2, que el criterio fundamental para definir a los pueblos indígenas es la conciencia indígena.

2) La tierra, el territorio y los recursos. En la discusión internacional, el problema no se limita sólo al registro de la propiedad de la tierra que ocupan ancestralmente, sino al reconocimiento de los derechos que tienen los pueblos indígenas a los bienes del subsuelo. En el caso mexicano ni pensarlo. Incluso aceptando que éstos son propiedad de la nación, se ha negado a los pueblos indígenas el establecimiento de sus propios códigos para regular la propiedad y tenencia de la tierra.

3) El desarrollo económico. Éste es quizá el más notorio. Los daños causados por los proyectos modernizadores, neoliberales o globalizadores, los han reducido apenas a la capacidad de autosubsistencia en algunos casos, porque en otros, se encaminan lentamente a su desaparición. Pero también hay que hacer notar que hay daños importantes debidos al desarrollo de presas hidroeléctricas y a la explotación de los bosques, por ejemplo. Los dueños del capital no tienen límites en la explotación de las riquezas naturales, en la instalación de industrias o en el desarrollo turístico en los territorios de los pueblos indígenas. Desde este enfoque, no se explica por qué se debería detener el desarrollo en ciertas regiones del país que podrían generar beneficios económicos para "todos". No se contempla que los proyectos de desarrollo que se proponen ocasionan daños al am-

¹ Rodolfo Stavenhagen. "Los derechos indígenas: nuevo enfoque del sistema internacional", en *Justicia y Paz*, Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria, O.P.", número especial, Año IV, Nos. 3 y 4, julio-diciembre de 1989, pp. 9-22.

biente, descalifican el trabajo de las organizaciones indígenas, e incrementan el empobrecimiento y propician el despojo de sus bienes y territorios. En el art. 5 encontramos que se debe: a) reconocer sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales; b) respetar la integridad de sus valores, prácticas e instituciones; c) eliminar las dificultades que impiden establecer nuevas condiciones de vida y de trabajo.

4) Lengua, educación y cultura. En algunas regiones, la única posibilidad de pensar en pueblos indígenas es el uso de un idioma. Una vez más la lengua unifica. No sólo se trata de un medio de comunicación, sino que el idioma materno incluye dentro de una comunidad u horizonte de interpretación a sus hablantes. Las lenguas expresan patrones culturales y relaciones sociales. Tal vez ésta sea la causa de la ofensiva contra los idiomas nativos. Históricamente la imposición de una lengua ha sido un instrumento de conquista y dominación. La anulación de las lenguas indígenas se disfraza de culturización o modernización, pero en el fondo persigue la posibilidad de ruptura de las comunidades indígenas, lo que facilitaría su control y dominación.

5) El derecho indígena y la organización social. La coherencia interna y la organización social de los pueblos indígenas les ha permitido sobrevivir ante los persistentes ataques del exterior. Penetrar en la organización social, en sus tradiciones y costumbres, es el objetivo, por ejemplo, de la guerra de baja intensidad diseñada en La Escuela de las Américas, en Estados Unidos. En otra situación, los gobiernos buscan incidir en la organización social indígena porque consideran que de no hacerlo se propiciaría un ambiente separatista, y esto implicaría atentar contra la unidad nacional. Este argumento se utiliza para justificar su incorporación a proyectos que les son ajenos. Se habla de igualdad frente a la ley, sin pensar en las condiciones de equidad. El problema de respetar el derecho indígena es difícil; supone abrir espacios en la legislación de los países que permitieran su inserción, y los grupos conservadores y dominantes no están dispuestos a admitir apertura alguna.

6) El autogobierno, la autonomía y la libre determinación. Contra su voluntad se ha impuesto a los pueblos indígenas alternativas de gobierno que propician o facilitan su control. Por eso, los pueblos indígenas buscan abrir espacios en las legislaciones locales que reconozcan sus propios proyectos de organización social. El problema legal es, nuevamente, complejo. Cuando se inicia la discusión acerca de lo que significan los conceptos

de autogobierno, autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, se piensa que en el fondo lo que pretenden es separarse del núcleo dominante, apoderándose de los recursos naturales y provocando, en consecuencia, una grave desestabilización social.

Tal vez esta breve descripción de la problemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y la respuesta que la sociedad ha ofrecido pudiera interpretarse de esta manera. De entrada, se piensa que para remediar la conciencia de culpa es suficiente con atender a sus necesidades, dotarlos de servicios, encontrando la manera como se les puede dar o ayudar. El problema se limita a pensar que el que tiene debe dar, y el otro, por el contrario, debe asumir pasivamente su función de receptor, y agradecerle su benevolencia. Pero mientras, las comunidades indígenas pretenden que les dejen ser, abrir sus propios caminos, y encontrar sus propias soluciones; externamente la preocupación de los grupos en el poder es diferente. Las comunidades indígenas desean simplemente que les permitan ser. La ayuda o el apoyo es importante, pero no a cualquier costo.

La diferencia es radical: por una parte, la posición de quien piensa que tiene y debe ayudar y, por la otra, la posibilidad de dejar al otro, en tanto que es diferente, a ser como su propia historia le permite desarrollarse y crecer, respetando su propio proyecto de vida, independientemente de que discrepe de nuestros propios criterios, y evitando a toda costa imponerle un modelo de vida que le es ajeno. Ésta es la diferencia. Ésta es también la urgencia.

1.2. La gestación de un consenso

De pronto da la impresión de que, en torno a la posibilidad de que sean respetados los derechos de los pueblos indígenas, la sociedad civil se ha desmoralizado. En 1994, la presión de la sociedad civil obligó al expresidente Salinas a detener el fuego. Posteriormente, en febrero de 1995, la sociedad civil exigió que cesara la ofensiva del Ejército Mexicano contra las bases de apoyo del EZLN en la zona de conflicto del estado de Chiapas.

Lamentablemente la situación no ha cambiado. La prolongación del conflicto, el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, la suspensión del diálogo, la ofensiva contra la mediación encabezada por el obispo Samuel Ruiz y, sobre todo, la intensidad de la violencia que ha desplegado el gobierno mexicano en su programa de guerra de baja inten-

sidad, son indicadores de que éste no ha entendido las exigencias de los indígenas chiapanecos, y que sigue pensando en tomar medidas para reducir la dimensión del conflicto. A esta situación debe añadirse la ofensiva en los medios de información, sobre todo en la televisión y en internet.

¿Y la sociedad civil? Todavía no reacciona. Se llenó de información. Las campañas políticas la están distraendo. Todo esto ha propiciado que su interés haya disminuido. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, la sociedad civil ha dejado de participar activamente, lo cual puede ser resultado de un conflicto que se ha alargado, y que obviamente crea desgaste. Asimismo puede ser producto de la estrategia gubernamental por disminuir la atención al conflicto indígena. Puede ser también que el interés mostrado al inicio de la guerrilla en Chiapas haya sido producto del momento, y que ahora se pueda pensar que la intensidad del conflicto se ha reducido porque no hay enfrentamientos con el Ejército Mexicano.

De cualquier manera, la posición de la sociedad civil frente al conflicto del gobierno mexicano con las comunidades indígenas podría ser una buena escala para medir su nivel de concientización, y su capacidad de organización. No se trata de desconocer las acciones meritorias de grupos que están trabajando en las zonas indígenas, o que enfocan sus acciones a la protección de los que han emigrado a los núcleos urbanos, sino que los señalamientos se hacen con la buena intención de provocar la reflexión, de proponer procesos autocríticos para reconocer errores y limitaciones, pero, sobre todo, para señalar la necesidad de coordinarse para hacer crecer los esfuerzos aislados que hoy día encontramos.

Adela Cortina, filósofa española, lleva a cabo una serie de reflexiones sobre la posibilidad de ir procurando la creación de espacios en donde sea factible reconstruir el mundo de vida de los sujetos. Su trabajo puede dar luz a una posible respuesta acerca de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

En uno de sus recientes libros,² Adela Cortina, siguiendo el pensamiento de M. Kant, desarrolla el siguiente razonamiento: Suponiendo que un pueblo de demonios enfrentara una situación de crisis que pusiera en riesgo su propia existencia, y que habría demonios tontos y demonios inteligentes, los tontos, ante el problema de organizarse para subsistir, serían incapaces de hacerlo y generarían su propia destrucción; pero, por el contrario, los inteligentes encontrarían alternativas de organización que les

² Adela Cortina. *Hasta un pueblo de demonios*, Madrid, Taurus, 1999.

permitirían superar los problemas, no por un acto de bondad, sino por conveniencia. Entonces, si hasta un pueblo de demonios puede generar espacios que le permita subsistir, ¿por qué los seres humanos no seremos capaces de hacerlo? Si no formamos parte de los demonios tontos, al menos por propia conveniencia deberemos encontrar alternativas que permitan ser a nuestras comunidades indígenas, sin pretensiones de dominio o manipulación de por medio.

En otros trabajos,³ Adela Cortina desarrolla otra idea que será útil en este análisis: ante la complejidad de los problemas que se vienen presentando en las sociedades avanzadas, desde un planteamiento ético es posible ir generando espacios de solución, no de una manera global, sino que se puedan ir resolviendo problemas concretos, que pudieran ir logrando mejores condiciones de vida. A esta alternativa le llama ética de los mínimos, producto de acuerdos fáctico-pragmáticos.

El diálogo ha sido la alternativa que se ha venido proponiendo para generar espacios de discusión de los problemas que aquejan a la sociedad. Sólo que aquí hay que precisar qué se entiende por tal. Desde la perspectiva de la filosofía, el diálogo es básicamente la búsqueda de un acuerdo orientado única y exclusivamente por el afán de encontrar la verdad. Se hacen de lado intereses particulares o de grupo. Se evita la tendencia de imponer al otro el propio punto de vista. Se acepta la posibilidad de que pueda participar en el discurso proponiendo los temas que son de su interés. Pero, sobre todo, el diálogo implica que de antemano se asuma la posibilidad de cumplir los acuerdos que se vayan pactando.⁴

Es evidente que ante la posibilidad de abrir la búsqueda de consensos para solucionar los problemas de los derechos humanos de los indígenas, los espacios para generar alternativas de diálogo podrían pensarse como una posible solución. Ésta es la propuesta que diferentes pueblos indígenas han hecho: dialogar, abrirse a la posibilidad de encontrar una razón en común. En el documento de la OIT, art. 6 núm.1 encontramos que se debe: a) consultar a los pueblos interesados; b) hacer participar a los pueblos interesados, y c) encontrar los medios para el pleno desarrollo de instituciones e iniciativas de esos pueblos.

³ Por ejemplo, en *Ética sin moral*, Madrid, Tecnos, 1990.

⁴ Cfr. Jürgen Habermas. "Teorías de la verdad", en *Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos*, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 153-154.

Desde la filosofía, las condiciones para un diálogo se plantean con claridad, tal y como se mencionó líneas arriba. En los hechos, el diálogo se da desde horizontes culturales diferentes, y se dificulta severamente la posibilidad del encuentro. Y en el caso de que se hable de dialogar entre representantes gubernamentales no indígenas, con representantes indígenas, el problema se acrecienta, no sólo por pertenecer a horizontes culturales diferentes, sino también por ubicarse en perspectivas históricas distintas. Si la comprensión del pensamiento del otro, a través del diálogo, se pudiera entender como la fusión de horizontes, cuando se trata sólo de personas con horizontes culturales diferentes se dificulta llegar a acuerdos (después vendrá el compromiso por cumplirlos), pero se complica aún más cuando se vive en un mismo momento con interpretaciones históricas y cosmovisiones diferentes.

Es probable que el diálogo, como se plantea en las sociedades modernas, se preocupe más por convencer al otro de las propias razones, que de encontrar respuestas comunes. En este sentido, más que orientarse por el valor de la verdad, el bien, la justicia, etc., se orienta por los intereses que cada cual representa. Por eso, los gobiernos son los responsables de hacer participar a los pueblos indígenas para proteger las violaciones a sus derechos humanos, de buscar la igualdad de oportunidades en la legislación nacional, y la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales, así como de eliminar las deficiencias socioeconómicas.

Del diálogo fundado en valores se derivan consensos, acuerdos, cuyo compromiso de cumplirlos no se objeta, ni se cuestiona. Del diálogo, si así se pudiera llamar, que parte de intereses se derivan sólo acuerdos cuyo cumplimiento depende del propio interés por acatar lo acordado, o bien de la fuerza o coerción que el otro pudiera ejercer para obligar a su cumplimiento.

Desde la primera perspectiva, no es difícil pensar que la posibilidad del diálogo con los pueblos indígenas esté muy cerca de un intento genuino por encontrar soluciones, y que deberá asumir los valores que fundamentan el ejercicio legítimo de la autoridad.

Sólo que desde el horizonte cultural en que se mueven los pueblos indígenas es difícil asumir que al otro le motivan intereses individuales o de grupo, y que no hay preocupación alguna por encontrar soluciones integrales. En el art. 4 leemos que se debe salvaguardar a personas, instituciones, bienes, trabajo, cultura y medio ambiente. Es difícil pensar, en nuestros términos, que el otro no se siente a dialogar para alcanzar consensos,

para comprender el dolor y el sufrimiento, es penoso pensar que no se entienda la dignidad y la grandeza de las culturas indígenas.

Por ello, ante el conflicto, si bien es necesario alcanzar consensos mediante el diálogo, se requiere también una actitud de autolimitación como condición básica para lograr compromisos y cumplirlos.

Por autolimitación se entiende, en este momento, el abandono de actitudes autoritarias, prepotentes o arrogantes, que suelen ser comunes en quienes de entrada consideran estar por encima del otro. La autolimitación estaría indicando la necesidad de llegar al diálogo sin anticipar el procedimiento por el cual se impondrá al otro un acuerdo; aseguraría que se puede escuchar, comprender y, sobre todo, que es posible cumplir con la palabra comprometida.

Ésta es una alternativa para reflexionar en torno al problema del cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas. De ninguna manera se propone como la única solución, pero seguramente su discusión y análisis nos permitirá comprender el problema desde un ángulo diferente, pero, sobre todo, nos hará entender que de ninguna manera será una razón arrogante, cínica, la de quien tenga la última palabra.

Para terminar con esta reflexión transcribo algunas ideas de Karla Vanessa Inzunza, una estudiante de filosofía de la Universidad Iberoamericana, y que como observadora de los derechos humanos fue expulsada por el ejército y la policía del municipio autónomo rebelde Ricardo Flores Magón, en Taniperla, el 11 de abril de 1998:

Hablamos de derechos humanos cual agua azul que baja por la montaña, pero no es agua sino lágrimas del hombre que ya no soporta más la carga de opresión, de hambre y de nostalgia. Y eres tú, hermano pensador, que con entrega y amor nos muestras su importancia y su valor.

Ahora la palabra la tiene la sociedad civil, la tenemos nosotros. 